

Santiago, siete de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Demanda

Mauricio Antonio Poblete Lizama, inspector monofásico, con domicilio en Avenida Circunvalación Américo Vespucio Norte 2.880, oficina 306, Edificio Santiago Norte, comuna de Conchalí, interpone denuncia por vulneración de derechos fundamentales contra Rovider Latin America SPA, con domicilio en Rivas Vicuña 872, comuna de Quinta Normal.

Expone haber ingresado a prestar servicios para la demandada el 11 de noviembre de 2022, en calidad de inspector técnico de pérdida monofásico, con una remuneración ascendente a \$872.064.

En enero de 2023 comenzó a haber irregularidades en el pago de remuneraciones, motivo por el cual varios trabajadores, encabezados por él, presentaron, el seis de febrero, una denuncia ante la Inspección del Trabajo, a la que se le asignó el número 1313/2023/191.

El 30 de marzo de ese año fue requerido para firmar un anexo de contrato, a lo que él se negó por estar fuera de plazo, y fue finalmente despedido por necesidades de la empresa, sin cumplimiento de formalidades.

Dado lo injustificado del despido, postula que su despido es una represalia por haber activado la señalada fiscalización, con infracción de la garantía de indemnidad consagrada en el artículo 485 del Código del Trabajo.

Previas citas legales, solicita se declare:

1.- La existencia de la lesión de los derechos fundamentales en razón del número uno del artículo 495 del Código del Trabajo, relativo a la vulneración de la garantía de indemnidad consagrada en el artículo 19, número tres, de la Constitución Política de la República.

2.- Que, por el inciso final del artículo 495, se remita copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para ser incorporada en el Registro Nacional de Empresas que vulneran derechos fundamentales.

3.- Que se condena a la demandada al pago de \$9.592.704 (nueve millones quinientos noventa y dos mil setecientos cuatro pesos), correspondiente a once remuneraciones mensuales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 del Código del trabajo, o en subsidio una suma



igual o superior a seis remuneraciones mensuales, con reajustes, intereses, multas y costas.

Contestación

En la contestación, la demandada pide el rechazo de la demanda.

Expone que el despido cumplió con todas las formalidades, y obedeció a una racionalización por reestructuración de la disciplina mercado CGE a contar de abril de 2023, con el objeto de optimizar servicios.

Señala ser contratista de la empresa CGE, y destaca que, en todo caso, el actor se conformó con el despido, puesto que no solicitó que este fuera declarado injustificado.

Admite haber sido fiscalizada, pero ello ocurrió el nueve de abril de 2023, como consecuencia de un requerimiento formulado por 10 trabajadores, entre ellos el actor, lo que, sumado a la conformidad del demandante con el despido, hace improcedente la demanda.

CONSIDERANDO:

Primero: Por no estar controvertido, según quedó constancia, además, en la audiencia preparatoria, se tiene por efectivo que existió una relación laboral entre las partes que se extendió entre el 11 de noviembre de 2022 y el 30 de marzo de 2023, en virtud de la cual el actor percibía una remuneración de \$872.064, contrato que terminó por despido fundado en necesidades de la empresa.

Segundo: Con el mérito de la documental rendida por el demandante, en particular el Informe de Exposición correspondiente a la fiscalización 1313/2023/191, y lo admitido por la empresa, resulta que cierto que el demandante, en conjunto con otros 9 trabajadores, la denunciaron por infracciones a la ley laboral.

El referido documento da cuenta de que la tramitación administrativa se inició por solicitud de seis de febrero de 2023. El inspector se constituyó en el domicilio ubicado en “(...) Cabo de Hornos N° 12296 de la comuna de La Pintana, de la empresa Sociedad de Tercerización de Servicios Provider Latin America Spa; en visitas inspectivas, realizadas con fechas 20/03/2023 y 23/03/2023, se encuentra el lugar cerrado, sin moradores, verificando que corresponde a un domicilio particular”. Se continuó en la modalidad remota, remitiendo, el 30 de marzo de 2023, correo electrónico al registrado en la institución, comunicación que fue respondida.



Tercero: Como se advierte, la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo -a que alude el artículo 485 del Código del Trabajo- se había iniciado tiempo antes del despido, pero se puso en conocimiento de la demandada el mismo día en que fuera despedido el demandante.

Cuarto: El artículo 493 dispone que *“Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”*.

El despido ocurrido el mismo día en que se inicia una fiscalización por hechos denunciados por el trabajador despedido, es indicio suficiente de ser aquél represalia a este comportamiento del trabajadores.

Y la empresa no ha desplegado actividad alguna para justificar el despido.

Se ha escudado en no haberse demandado un despido injustificado, lo cual no tiene mayor fundamento, por cuanto no es exigencia legal, sino algo facultativo para el trabajador, y la necesidad que surge para ella de demostrar la justificación del despido descansa en el referido artículo 493 y no en el número 1) del artículo 454, ambos del Código del Trabajo.

Por tanto, se concluye que el despido del demandante ha sido con lesión de su derechos a la indemnidad. Al no existir elementos que permitan atribuir alguna gravedad especial al hecho, será la demandada entonces condenada a pagar seis remuneraciones.

Quinto: La demás prueba, pormenorizada en el acta de la audiencia de juicio, no altera lo razonado.

El contrato de trabajo, el finiquito, el acta de comparendo y el reclamo administrativo terminado en 1025, no aluden a cuestiones controvertidas y sustanciales, mientras que el testigo del actor declaró en forma coherente con lo establecido.

La exhibición pedida por el actor fue cumplida en parte con la prueba rendida por la demandada, incluyendo el contrato, anexos -menos uno según el actor, pero no dice cuál-, liquidaciones, carta de despido y finiquito, y no satisfecha en lo que se refiere a las cotizaciones.

Sin embargo, ninguno de esos antecedentes se vincula con el fondo de la cuestión y tratan más bien de aspectos no controvertidos.



Sexto: Resultando totalmente vencida la parte demandada, se le condenará en costas.

Por estas consideraciones, las disposiciones citadas y aplicables y lo previsto en los artículos 453 y siguientes del Código del Trabajo, se declara que:

1.- Se ha lesionado la indemnidad del actor con ocasión de su despido, según esta se contempla en el inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo.

2.- Se condena a la demandada a pagarle \$5.232.834 por indemnización prevista en el inciso tercero del artículo 489 del señalado código, con las actualización que prevé el artículo 173 del mismo cuerpo legal.

3.- Se condena en costas al a demandada, que se regulan en \$400.000.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

RIT T-1396-2023

RUC 23- 4-0491469-3

Pronunciada por Daniel Juricic Cerda, juez titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a siete de marzo de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

